

Concepción, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

**VISTOS Y OÍDOS:**

Que en esta causa RIT T-4-2020 del Juzgado de Letras y Garantía de Lota, por sentencia de veintitrés de octubre de dos mil veinte, dictada por la Jueza Suplente doña Cyndia Contreras Placencia, se rechazó la excepción de caducidad de las acciones de práctica antisindical, de tutela laboral por vulneración de derechos y de despido improcedente deducidos por la demandada Corporación Educacional UDEC C.F.T. Lota Arauco. Se rechazaron también las acciones de práctica antisindical, de tutela laboral por vulneración de derechos y de despido improcedente deducidos por don Fernando Elías Morales Muñoz.

En contra del referido fallo, en la decisión que rechazó las excepciones de caducidad, la parte que representa a la Corporación Educacional UDEC C.F.T. Lota Arauco dedujo recurso de nulidad, por la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo en relación con los artículos 489, 486 inciso final y 168, todos del Código del Trabajo, por haberse pronunciado la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Por su lado, la parte demandante, don Fernando Elías Morales Muñoz, dedujo recurso de nulidad: **a.-** Respecto de la acción de despido antisindical, fundada en dos causales: la del artículo 477 inciso 1º segunda parte del Código del Trabajo, en relación a los artículos 294 y 493 del Código del Trabajo; en subsidio la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo; **b.-** en subsidio, respecto de la acción de despido vulneratorio de derechos fundamentales, fundada en dos causales: la del artículo 477 inciso 1º segunda parte del Código del Trabajo, por infracción al artículo 2 del mismo código en relación a los



artículos 19 N° 16, 19 y 12 de la Constitución Política de República y al artículo 493 del Código del Trabajo; en subsidio de la anterior la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo; y c.- En subsidio, respecto de la acción de despido injustificado, la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo.

Con fecha 15 de abril del 2021, se llevó a efecto la vista del recurso, interviniendo en ella los apoderados de las partes.

**CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:**

**I.- En relación a la nulidad interpuesta por el representante de la Corporación Educacional UDEC C.F.T. Lota Arauco**

**1º** La Corporación Educacional UDEC C.F.T. Lota Arauco dedujo recurso de nulidad por la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo por haberse pronunciado la sentencia con infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

**2º** En particular, señala que el vicio consiste en la contravención formal al artículo 489 del Código del Trabajo respecto del despido antisindical; al artículo 486 inciso final del mismo código respecto de la acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales; y al artículo 168 también del Código del Trabajo, en cuanto a la acción por despido improcedente.

**3º** Refiere que el despido del actor, ocurrió el 21 de enero de 2020 y la demanda de autos fue presentada el 1º de abril de 2020. Así, entre la fecha del despido y la interposición de la demanda transcurrieron 61 días hábiles, de este modo se presentó la demanda fuera del plazo legal que vencía el 31 de marzo de 2020.

**4º** En relación a los efectos que sobre ese plazo tiene la ley N°21.226 promulgada el 1º de abril del año 2020 y publicada



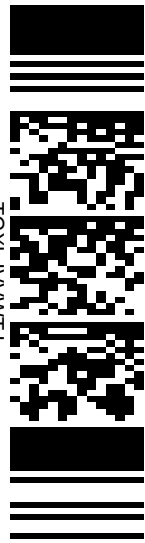
en el diario oficial el 2 de abril de 2020, señala el recurrente que ningún efecto tuvo desde que ésta sólo entró en vigencia el 2 de abril de 2020. De esta forma, dado que cuando se presentó la acción de autos, el 1º de abril de 2020, aún no se encontraba ni promulgada ni publicada la Ley N°21.226, no puede aplicarse a este caso.

**5º** La sentencia recurrida, rechazó estas excepciones de caducidad fundada en que la ley 21.226 establece un régimen jurídico de excepción para las audiencias y actuaciones en los procesos judiciales por el impacto de la pandemia por Covid 19 en Chile.

El fallo resuelve que este régimen es aplicable al caso de autos porque el plazo para la interposición de la demanda estaba corriendo cuando se inició el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, declarado por el decreto supremo N° 104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de 18 de marzo de 2020.

**6º** Que esta Corte comparte la interpretación de la jueza de la instancia. En efecto, no se aprecia la existencia de la infracción denunciada por la recurrente y demandada de autos pues del inciso tercero del artículo 8 de la Ley N° 21.226 no establece diferencias entre los plazos que estaban corriendo al momento de su publicación, como ocurre en este caso, y los plazos que comenzaron a correr después de ella.

En este sentido la jurisprudencia ha señalado *“pues del inciso tercero del artículo 8 de la Ley N° 21.226 -que establece la prórroga de los plazos de prescripción y caducidad durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública- no contempla diferencia alguna entre los plazos que ya hubieran comenzado a correr con aquellos que no. En efecto, la ley no hizo*



*esta distinción por cuanto no se puede limitar el derecho de las partes a ejercer las prerrogativas que establece la ley, porque lo que se busca es permitir que puedan obtener el pronunciamiento que, en su oportunidad, sometieron a la decisión de los tribunales.* (En este sentido sentencia de la E. Corte Suprema de 1º de marzo de 2021 recaída en los autos rol N° 122.126-2020)

7º Por las razones dichas el recurso de nulidad interpuesto por la demandada será rechazado.

**II.- En relación a la nulidad interpuesta por los representantes del demandante don Fernando Elías Morales Muñoz**

8º Respecto de la acción de despido antisindical, se interpone como primera causal de nulidad la del artículo 477 inciso 1º segunda parte del Código del Trabajo esto es *“infracción de ley que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo”*. La recurrente estima infringidos los artículos 294 y 493 del Código del Trabajo.

9º Señala la recurrente que el legislador establece en el artículo 294, como requisitos para un despido o término de relación laboral antisindical los siguientes: a.- Ser un trabajador no aforado y b.- Despido por represalia por: afiliación sindical, participación en actividades sindicales o en negociación colectiva.

Dado que los hechos que puedan dar lugar a esta circunstancia son en ocasiones muy complejos de acreditar para quien denuncia, el legislador estableció en el artículo 493 del Código del Trabajo la regla de los indicios.

10º El recurrente argumenta que la sentencia infringe ambas normas.

El artículo 294 del Código del Trabajo, se infringiría



porque el fallo agrega requisitos distintos a los previstos en dicho artículo para entender configurado un despido antisindical.

La infracción al artículo 493 del Código del Trabajo la entiende configurada por cuanto la sentencia no hace un análisis sobre si el conjunto de los indicios tiene la suficiencia para acreditar la vulneración que se alega y, en cambio, exige que cada uno de los hechos invocados como indicios constituya por sí solo una práctica antisindical.

**11º** Que, en primer lugar, en lo que se refiere a la infracción del artículo 294 del Código del Trabajo, esta norma dispone *“Si el despido o el término de la relación laboral de trabajadores no amparados por fuero laboral se realiza en represalia de su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o negociación colectiva, el despido o el término de la relación laboral no producirá efecto alguno, aplicándose el art. 489, con excepción de lo dispuesto en sus incisos tercero, cuarto y quinto.”*

De esta manera el legislador establece como requisitos para un despido o término de relación laboral antisindical:

**a.-** Ser un trabajador no aforado.

**b.-** Haber sido despedido en represalia por su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o en negociación colectiva.

Como se ve, la ley no exige que deba, además, acreditarse la existencia de una intencionalidad de parte de la empleadora de provocar una afectación a la libertad sindical a través del despido del actor, como tampoco contempla la necesidad de probar que dichas consecuencias lesivas se verificaron.

De esta forma se trata de una causal en la que, de ser acreditados los hechos objetivos que indica, la concurrencia de la



intensión es presumida por la norma en concreto.

En efecto, el tribunal está obligado a constatar la concurrencia de la conducta que la ley contempla, esto es, que el demandante es un trabajador no aforado y el hecho de haber sido despedido en represalia por su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o en negociación colectiva. Acreditadas estas circunstancias, es la ley quien a través de la tipificación del referido actuar presume que, ejecutada esa conducta, concurre la voluntad o intención de infringir la libertad sindical.

En cuanto a la prueba de la existencia de la lesión, acreditadas las circunstancias indicadas en el artículo 294 dicho, la lesión queda también probada desde que el sindicato pierde un afiliado por el despido antisindical denunciado.

Atendido lo anterior, al exigir la sentencia de la instancia la prueba de la intención de la demandada de atentar contra la libertad sindical y del daño efectivo a dicha libertad, como consecuencia del despido del actor, aplicó erróneamente el artículo 294 del Código del Trabajo como denuncia el recurrente y demandante.

**12º** En segundo lugar, en lo que se refiere al artículo 493 del Código del Trabajo, también se infringe por la sentencia recurrida cuando el fallo analiza los hechos invocados y probados en el proceso de manera separada para establecer si existen o no indicios suficientes de una vulneración de derechos.

Así, por ejemplo, fallo expresa en relación a los dos primeros hechos invocados como indicios por la recurrente, que si bien están acreditados, no visualiza como dichas circunstancias podrían ser indicios de la práctica sindical que se denuncia. Lo mismo ocurre respecto de cada uno de los hechos



décimo, decimosegundo y decimotercero invocados por la demandante.

El artículo 493 ordena que el análisis que debe hacerse en la sentencia es de toda la prueba rendida en su conjunto y no parceladamente.

En efecto, el artículo 493 dispone *“Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”*.

Como expresa textualmente este artículo los indicios deben emanar *“de los antecedentes aportados por la parte denunciante”*. Así, estos deben emanar no de una parte de la prueba sino de toda la prueba rendida por la denunciante, y también, aun cuando la norma no lo dice, de todos los antecedentes acompañados por la propia demandada.

La sentencia no puede afirmar, sin vulnerar el artículo 493, que un determinado hecho acreditado no es constitutivo de práctica antisindical sin relacionarlo con los demás antecedentes del proceso.

**13º** Que, de no mediar estos errores la sentencia habría concluido que existían indicios suficientes de una vulneración de derechos fundamentales en el despido del actor, esto es, antecedentes que hacían suponer con cierta razonabilidad y probabilidad que ella se ha producido.

Establecida la existencia de estos indicios suficientes, la demandada tenía la obligación de explicar los fundamentos de la medida adoptada y de su proporcionalidad, acreditando que el despido obedeció a motivos razonables y que el mismo no dice



relación con la vulneración de derechos fundamentales. De no acreditarse dichos fundamentos y proporcionalidad el despido debe declararse antisindical.

De esta manera, el recurso interpuesto habrá de ser acogido en esta parte, toda vez que la infracción anotada influyó sustancialmente en lo decisorio de la sentencia recurrida, porque de haberse aplicado correctamente los artículos 294 y 493 del Código del Trabajo, la conclusión habría sido diametralmente distinta.

**14º** Considerando que se ha dará lugar al recurso por la causal antes referida, se omitirá el análisis a las demás causales opuestas en subsidio de ésta.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo previsto en los artículos 294, 493, 477 y 478 del Código del Código del Trabajo, se declara:

**I.-** Que **SE RECHAZA** sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el apoderado de la Corporación Educacional UDEC C.F.T. Lota Arauco, contra la sentencia definitiva de fecha veintitrés de octubre de dos mis veinte dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Lota; y

**II.-** Que **SE ACOGE**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por los apoderados del demandante Fernando Elías Morales Muñoz contra la sentencia definitiva de fecha veintitrés de octubre de dos mis veinte dictada por el Juzgado de Letras y Garantía de Lota; en consecuencia, **SE LA ANULA**, debiendo dictarse, acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la sentencia de reemplazo correspondiente con arreglo a la ley.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Riola Solano Guzmán





No firma el Ministro Sr. Juan Villa Sanhueza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse con feriado legal.

N° Laboral - Cobranza-424-2020.

Carola Paz Rivas Vargas  
MINISTRO  
Fecha: 29/06/2021 10:47:03

Riola Loreto Solano Guzman  
ABOGADO  
Fecha: 29/06/2021 12:55:40



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carola Rivas V. y Abogada Integrante Riola Solano G. Concepcion, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.





XZWDJVEXTJ

Concepción, veintinueve de junio del 2021.

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 478 del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo:

Visto:

De la sentencia anulada se reproducen sus considerandos Primero a Quinto y se agrega:

**1º** Que el artículo 294 del Código del Trabajo dispone *“Si el despido o el término de la relación laboral de trabajadores no amparados por fuero laboral se realiza en represalia de su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o negociación colectiva, el despido o el término de la relación laboral no producirá efecto alguno, aplicándose el art. 489, con excepción de lo dispuesto en sus incisos tercero, cuarto y quinto.”*

De esta manera el legislador establece como requisitos para que un despido sea considerado antisindical que se trate de un trabajador no aforado y que sea despedido en represalia por su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o en negociación colectiva.

Respecto de la calidad del demandante de ser un trabajador no aforado no existe controversia entre las partes. De esta forma el análisis de la prueba rendida por las partes se centrará en el segundo requisito, esto es, si el despido del actor correspondió a una represalia por su afiliación sindical, participación en actividades sindicales o en negociación colectiva.

**2º** La demandante invocó 14 hechos que a su juicio constituyen indicios suficientes de vulneración de derechos fundamentales en el despido del actor, los que serán analizados



separadamente en cuanto a si están o no acreditados y a continuación se valorará si los hechos acreditados pueden estimarse indicios de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales denunciada.

Los hechos invocados por la demandante son los siguientes:

**a)** El primero se relaciona con el cambio de autoridades de la demandada ocurrida en el año 2019 que afectó los cargos de Rector, Vicerrector y Presidente del Directorio de la demandada.

Este hecho no ha sido discutido por las partes de manera que se dará por acreditado.

**b)** El segundo hecho invocado por la demandante, se refiere a la circunstancia que la nueva administración realizó cambios en la dirección y toma de decisiones del CFT Lota-Arauco, excluyendo al sindicato, trabajadores y jefes de carrera.

Este hecho se tendrá por establecido basado en la declaración de los testigos Hortensia Zapata Castro, tesorera del sindicato, y Diego Erices Bravo que así lo señalan. Así también lo expresa la minuta de resumen de la reunión de 28 de octubre de 2019, sostenida en las dependencias de la demandada, en cuyos puntos 1, 2, 4, 5, 18, 19 y 22, se da cuenta de dichas circunstancias. Se dará valor a este documento por cuanto los tres testigos de la demandante asistentes a la reunión en cuestión reconocen su contenido, como el hecho de haber sido elaborado por el sindicato para ser remitido a las autoridades de la demandada, sin que afecte al valor de su contenido la falta de firma de los asistentes a la reunión.

Confirma este segundo hecho invocado por la demandante, las cartas de fechas 2 de enero de 2020 y 23 de



enero de 2020, enviadas por el Sindicato a Rolando Hernández, presidente del Directorio de la demandada y a Patricio Pérez Vergara, rector de la demandada, respectivamente, las que dan cuenta de estos hechos.

**c)** Los hechos tercero y cuarto invocados por la demandante se refieren a los mismos cambios impuestos por la nueva administración y los problemas de comunicación ya referidos en el hecho 2, los que se encuentran acreditados por los mismos medios de prueba ya citados.

**d)** El quinto hecho invocado se refiere a malos tratos e insultos que se dieron a otros trabajadores por parte de las autoridades de la institución demandada.

El testigo Juan Carlos Garrido Méndez declara sobre agresiones verbales de que fue objeto por parte del señor Eduardo Rozas Paz, Vice rector de la demandada, de lo que da cuenta también en su punto 4 la minuta de resumen de la reunión de 28 de octubre de 2019. No existiendo prueba en contrario, se tendrá por acreditado este hecho

**e)** El sexto hecho se refiere a la realización de una reunión en dependencias de la demandada el 28 de octubre de 2019 con la asistencia del Presidente del Directorio, don Rolando Hernández, y en la cual se dieron a conocer las situaciones existentes entre los directivos de la institución y los trabajadores.

Respecto de haberse verificado esta reunión no hay discrepancia entre las partes ya que el punto IV, B), N° 3 de la contestación de la demanda reconoce esta reunión donde participó el presidente del directorio Rolando Hernández y el rector Patricio Pérez, que se sostuvo en una sala del CFT con estudiantes del plantel y varios trabajadores afiliados al sindicato y otros no afiliados, con un total de 30 personas.



Este hecho fue corroborado por los tres testigos de la demandante señores Garrido Méndez, Erices Bravo y Zapata Castro, todos asistentes a la reunión.

f) El séptimo hecho invocado por la demandante es que producto de dicha reunión, todos los trabajadores que hablaron en representación de la asamblea no aforados fueron despedidos.

Ninguno de los testigos de la demandada estuvo presente en la reunión dicha y el absolvente de la demandada declara conocer de la reunión sólo de oídas.

La demandante, por su parte, rindió la prueba del testigo Garrido Méndez quien expresa que en esa reunión el demandante expuso la problemática de los guardias quienes a raíz de los desórdenes ocurridos a propósito del denominado “estallido social”, a partir del 18 de octubre de 2019, no podían o les era muy difícil asistir a su trabajo. El testigo Erices Bravo señaló que en esa reunión el demandante tomó la palabra en dos oportunidades para quejarse porque los guardias no tenían como ir y volver del trabajo producto de los desórdenes y barricadas y que la demandada les descontaba los días que no podían ir. Declara además que los trabajadores que hablaron ese día en esa reunión fueron despedidos. Confirma estas afirmaciones la declaración de la testigo Zapata Castro, tesorera del sindicato, quien señala que el demandante habló en la reunión del 28 de octubre de 2019 expresando que la demandada no se preocupaba de los guardias y les descontaban el día cuando no podían ir a trabajar a consecuencia de los disturbios ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Señala además que, en su opinión, esas intervenciones influyeron en el despido del actor.

Estos testigos además expresan que en la reunión el



demandante habló en nombre de los guardias porque tenía una participación activa en el sindicato, a pesar de no ser dirigente, por su experiencia anterior como dirigente sindical. Esta experiencia fue ratificada a través del oficio ORD 848 de la Dirección del Trabajo, que informó que el demandante fue tesorero por dos años y secretario también por dos años del Sindicato de guardias de la empresa Seguel Limitada en el Mall Plaza del Trébol.

Que si bien el testigo Erices Bravo y Garrido Méndez señalaron haber tenido problemas con el señor vicerrector Eduardo Rozas, por cuanto éste tenía mal trato con los trabajadores, esa circunstancia no parece suficiente para restarle valor a sus declaraciones, las que fueron confirmadas por la declaración de la presidenta del sindicato Hortensia Zapata Castro.

**g)** El octavo hecho invocado consiste en que con posterioridad a la reunión de 28 de octubre de 2019 la tensión con las autoridades fue en aumento, volviéndose el ambiente laboral más hostil.

Así lo expresan los tres testigos de la demandante Garrido Méndez, Erices Bravo y la presidenta del sindicato Hortensia Zapata Castro y así consta también en la carta remitida por el sindicato con fecha 23 de enero de 2020 al Rector Patricio Pérez Vergara.

**h)** El noveno hecho se refiere a que a partir de la referida reunión comienza un proceso de restructuración que culmina con el despido de varios trabajadores sindicalizados, entre ellos el demandante.

El testigo de la demandada Álvaro Rojas, jefe de administración y finanzas de la demandada, expresó que la





reestructuración comenzó a materializarse en octubre o noviembre de 2019, pero que se trata de un proceso que se habría venido analizando desde hacía tiempo atrás.

Sin embargo, no existe en los antecedentes de autos, en especial, en el informe emanado de la Comisión Nacional de Acreditación (Documento 49 de la demandada), en el informe financiero de la demandada evacuado por la empresa independiente EXMO para el proceso de acreditación de la demandada (Documento 48 de la demandada), ni en las actas del directorio de la demandada de 18 de octubre de 2019 y 13 de enero de 2020, relativas al presupuesto del año 2020, (Documentos 34 y 35 de la demandada), ninguna referencia a esta reestructuración y proceso de despidos.

De esta forma se tendrá por establecido que con posterioridad a la reunión de 28 de octubre de 2019 comienza un proceso de reestructuración que culmina con el despido de varios trabajadores sindicalizados entre ellos el demandante en el mes de enero de 2020.

i) El décimo hecho se refiere a que el sindicato solicitó información y reuniones de carácter urgente los días 2 y 16 de enero de 2020 para conocer la condición laboral de los trabajadores afectados, las que no fueron contestadas.

Se acompañaron las cartas de fechas 2 y 23 de enero de 2020 que dan cuenta de estas circunstancias.

Por su parte, la demandada no alegó que tales cartas no hubieran sido recibidas y no existe ningún antecedente que permita tener por establecido que se hayan realizado reuniones con el sindicato a raíz de aquellas.

j) El undécimo hecho invocado por la demandante se refiere a que el despido del demandado se realizó junto a otros 7



trabajadores de los cuales 6 estaban afiliados al sindicato y otro se encontraba por afiliarse, todos despedidos por la causal del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo.

La contestación de la demanda reconoce, en el punto II. 4. la existencia de 8 despidos en total incluido el demandante, a partir del día 21 de enero de 2020.

Según consta de documento N° 40 acompañado por la demandada, 6 de los trabajadores despedidos eran socios del sindicato. Por su parte, el oficio remitido por el sindicato del cual era miembro del demandante expresa que al año 2018 los trabajadores afiliados al sindicato eran 95 y que ese número disminuyó a 82 en el año 2020, de manera que aproximadamente un 50% de los trabajadores de la demandada estaban sindicalizados.

De esta forma se tendrá por establecido que el despido del demandado se realizó junto a otros 7 trabajadores de los cuales 6 estaban afiliados al sindicato.

**k)** Como duodécimo hecho invoca la demandante la proximidad temporal entre la fecha de la reunión de 28 de octubre de 2019 y el comienzo del proceso de reestructuración del CFT Lota- Arauco, la carta enviada por el sindicato y el despido del actor.

Sobre el particular la demanda expresó que la reestructuración que terminó con el despido de los 8 trabajadores no se inició a partir de la reunión dicha sino que se trata de un proceso que se analizó desde antes.

Sin embargo, como se dijo en la letra h) anterior, no existe en los antecedentes del proceso, ninguna referencia a esta reestructuración y proceso de despidos anterior al 28 de octubre de 2019, de manera que efectivamente existe una



proximidad temporal entre la reunión de 28 de octubre de 2019 y el comienzo del proceso de reestructuración del CFT Lota-Arauco, que culminó con el despido del actor y otros 7 trabajadores.

I) Como decimotercer hecho la demandante invoca que la carta de despido considera como motivo fundante del mismo la baja en las matrículas para el año 2020, situación que sería falsa, pues ese año habría habido un record de matrículas, además de la creación de nuevas carreras.

Para ello la demandante rindió la prueba testimonial de los testigos Garrido, Erices y Zapata quienes expresan que el año 2020 el CFT Lota-Arauco registró su mayor matrícula histórica.

Los testigos de la demandada señores Víctor Guzmán, Álvaro Rojas y María Eugenia Hermosilla señalan que el número de matriculados aumentó pero menos de lo presupuestado.

Se acompañó por la demandante el documento N° 6, emanado de la demandada, denominado Registro Histórico de Matrículas, de fecha 19 de marzo de 2020, el que da cuenta de la evolución de las matrículas totales para los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 registradas a marzo de cada año y que corresponden a 1.852, 1.949, 1.821, 1.854 y 1.960 matriculados totales, respectivamente.

De esta forma, de acuerdo a los antecedentes del proceso, la matrícula del año 2020 corresponde a la más alta registrada al menos desde el año 2016.

Por su parte, los proyectos de presupuestos del año 2020, a que se refieren los documentos 34 y 35 acompañados por la demandada, dan cuenta de una matrícula proyectada para el año 2020 de 2.285 y 2.075 alumnos la que no habría sido alcanzada. Sin embargo, estas cifras de matrículas no concuerdan con lo



que se expresa en el informe contenido en el documento N° 48 de la demandada, consistente en el informe de sostenibilidad financiera realizado por EXMO para el proceso de acreditación de la demandada el año 2019, el cual da cuenta de los supuestos utilizados y compromisos adoptados por el CFT Lota- Arauco, entre ellos, en la página 12 se compromete una matrícula de 1.849 alumnos entre los años 2020 y 2022. Este compromiso fue cumplido con creces el año 2020 cuando la matrícula total fue de 1.960 alumnos.

Que respecto de estos documentos se preferirá el emanado de una entidad independiente, EXMO, elaborado para la acreditación del CFT Lota- Arauco, por sobre los documentos emanados de la propia demandada, sobre todo considerando que las matrículas proyectadas en estos últimos resultan poco serias por ser demasiado alejadas de las matrículas históricas del CFT Lota- Arauco.

Por estas razones, se tendrá por acreditado que el año 2020 no hubo baja en las matrículas y que, por el contrario, éstas fueron mayores a los años 2016, 2017, 2018 y 2019 y a las presupuestadas.

**m)** Como hecho decimocuarto y final, la demandante invoca que la reestructuración de las funciones de los guardias, entre ellos el actor, no tiene aplicación sin que se incorporen nuevos elementos tecnológicos que ayuden a disminuir personal.

Sobre este hecho, la demandante no rindió prueba documental y los testigos nada expresan sobre el particular.

La prueba testimonial tampoco se refiere a este hecho de manera directa, por lo que no se tendrá por acreditado.

**3°** Que para los efectos del artículo 493 del Código del Trabajo los hechos relevantes establecidos en el proceso son: **a)**



a partir del cambio de autoridades de la demandada el año 2019 operó una nueva manera de relacionarse con los trabajadores, los que el sindicato representó a la dirección; **b)** que se realizó una reunión el día 28 de octubre de 2019 con la presencia del rector y presidente del directorio de la demandada, además de alumnos y personal presente ese día, en donde el demandante denunció en representación de los guardias que no se les pagaban los días no trabajados cuando no podían asistir a su trabajo producto de los desórdenes y barricadas existentes a raíz del denominado “estallido social” a partir del 18 de octubre de 2019; **c)** que de los 8 despedidos en el mes de enero de 2020, entre ellos el demandante, hay 6 trabajadores afiliados al sindicato; **d)** que el proceso de racionalización que culminó con el despido del actor se materializó inmediatamente después de realizada la reunión del 28 de octubre dicha; y **e)** que el año 2020 la demandada registró una matrícula superior a lo menos a los 4 años anteriores y a la proyectada, de manera que la baja de matrículas no pudo fundar el despido del actor como señala la carta de despido.

Estos hechos, a juicio de esta Corte, constituyen indicios que en su conjunto permiten conformar la sospecha razonable de que el demandado fue despedido considerando su participación en la reunión de 28 de octubre de 2019.

**4º** Que no obstante estos indicios no prueban la existencia de la vulneración de derechos fundamentales, sí tienen el efecto de exigir a la demandada explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

En la carta de despido del actor por la causal del artículo 161 inciso 1º del Código del Trabajo, esto es, necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, la demandada refiere dos



hechos fundantes para el mismo: **a.-** la disminución del número de alumnos matriculados para el año académico 2020, respecto de lo proyectado y de años anteriores; y **b.-** las mermas económicas que la demandada habría venido arrastrando los últimos años.

**a.-** En cuanto a la disminución del número de alumnos matriculados para el año académico 2020 respecto de lo proyectado y de los años anteriores, como ya se analizó en el considerando segundo letra l) precedente no existen antecedentes en autos en el sentido que el número de matriculados del año 2020 haya disminuido respecto de lo proyectado y de los años anteriores. Por el contrario, se encuentra acreditado que los alumnos matriculados el año 2020 fueron 1.960, esto es, mayor a la matrícula registrada los años 2016, 2017, 2018 y 2019; además de superior a los 1.849 alumnos comprometidos para los efectos de la acreditación de la demandada.

**b.-** En cuanto a las mermas económicas que la demandada habría venido arrastrando los últimos años, el absolvente Eduardo Rozas Paz expresa que el mal desempeño financiero de la demandada se arrastra desde hace 10 años y que ello fue observado por la Comisión Nacional de Acreditación en los procesos de acreditación de los años 2014, 2016 y 2019.

Por su parte, los testigos de la demandada Rodrigo Gatica, María Eugenia Hermosilla y Víctor Hugo Guzmán Cid indican que estas pérdidas se deben a exceso de personal, según se habría establecido en el proceso de acreditación de la institución del año 2019.

Sin embargo, ninguno de estos hechos fue probado.

En efecto, en el proceso sólo se acreditaron los resultados



financieros de la demandada para los años 2017, 2018 y 2019, según consta de los documentos N° 30, 31 y 32 acompañados por la demandada, los que dan cuenta que los años 2017 y 2018 la demandada tuvo ganancias y que sólo el año 2019 sufrió pérdidas.

Por su parte, en el documento N° 49 acompañado por la demandada, consistente en el acta de la Comisión Nacional de Acreditación sesión ordinaria 1378 de 9 de junio de 2019 y su informe adjunto, se concluye que concluye que no existe en la institución educacional demandada exceso de personal docente y no docente (página 12) y que las falencias de la demandada en el área financiera se deben a una falta en la estrategia de cobranzas y de una política de rentas para el personal docente (páginas 9, 10 y 11).

Además, la Comisión Nacional de Acreditación otorgó la acreditación a la demandada por 4 años, basándose entre otros antecedentes en que su situación financiera era “suficiente” según informe de EXMO que la Comisión Nacional de Acreditación tuvo a la vista y que se acompañó por la demandada como documento N°48.

**5°** Que, de esta forma, la demandada no ha logrado acreditar los fundamentos de la medida de despido del actor adoptada y de su proporcionalidad, como lo ordena el artículo 493 del Código del Trabajo.

Como se ha venido diciendo, no se acreditó la disminución del número de alumnos matriculados para el año académico 2020 respecto de lo proyectado y de los años anteriores, como tampoco las pérdidas económicas que la demandada habría venido arrastrando los últimos años.

Así mismo, se acreditó que no existe exceso de personal



académico y no académico.

6° Atendidos los antecedentes dichos, no habiendo el demandado acreditado los fundamentos de la medida de despido por necesidades de la empresa del demandante y de su proporcionalidad, se acogerá la acción por despido antisindical como se dirá.

Por estas consideraciones y de conformidad además a lo previsto en las disposiciones legales citadas y los artículos 474, 477 y siguientes del Código del Trabajo, **se declara:**

I.- Que **se rechaza** la excepción de caducidad de la acción por despido antisindical deducida por la demandada CFT Lota-Arauco;

II.- Que el despido del actor es antisindical, por lo que éste no ha producido efecto alguno, debiendo la demandada reincorporar al actor a su puesto de trabajo y pagarle sus remuneraciones íntegras durante todo el tiempo en que estuvo separado de sus funciones a razón de \$469.537 mensuales;

III.- Que las cantidades señaladas se reajustarán y devengarán intereses conforme a los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo, según corresponda;

IV.- Que **se rechaza** la demanda en todo lo demás, así como el resto de las alegaciones de las partes; y

V.- Que se condena en costas a la demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la abogada integrante señora Riola Solano Guzmán.

No firma el Ministro Sr. Juan Villa Sanhueza, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo del fallo, por encontrarse con feriado legal.

Rol 424-2020- Laboral





Carola Paz Rivas Vargas  
MINISTRO  
Fecha: 29/06/2021 10:47:05

Riola Loreto Solano Guzman  
ABOGADO  
Fecha: 29/06/2021 12:55:44



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Concepción integrada por Ministro Carola Rivas V. y Abogada Integrante Riola Solano G. Concepcion, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

En Concepcion, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

